

Serie 'Documentos de Trabajo'

Las tareas de Evo: Bolivia el día después

por Joan Prats

Enero de 2006

Las tareas de Evo: Bolivia el día después

Por Joan Prats

*Aún está oscuro
cuando va a amanecer*

La prensa internacional, incluida la española, no ha tratado bien ni a Bolivia ni a Evo Morales que ha sido caricaturizado y descalificado como indio ignorante, cocalero, confiscador, aliado y hasta subordinado de Castro y de Chávez, bloqueador de caminos, falso demócrata, incompatible con la “comunidad internacional”, arruinador seguro del país y, por si todo esto no bastara, hasta de títere de su vicepresidente, un intelectual brillante, leal y de muy buen hacer político, que ha elaborado una propuesta de “capitalismo andino” pero al que los asustadores califican de “comunista radical” envuelto en piel de cordero. Y con todo, cosas de la democracia, el pueblo ha hablado y ha derribado todo este inmenso castillo de naipes: Evo, con Álvaro detrás suyo, tienen por delante la posibilidad de dar un giro histórico a Bolivia. ¿Cómo han conseguido una victoria tan contundente y sin precedente en la corta historia democrática del país?

En 1982 Bolivia inició un proceso de democratización que desde 1985 se encauzó y estabilizó mediante el Decreto 21060 habilitador de las políticas de liberalización, de equilibrios macroeconómicos, de privatización, de estabilización y de algunas reformas estructurales... que luego, en 1989, se empaquetaron para toda América Latina en el llamado Consenso de Washington. Se trató de un modelo de gobernabilidad democrática muy elemental e imperfecto, conocido como “democracia pactada”, que hasta finales de los 90 mereció el reconocimiento y apoyo de la “comunidad de donantes”. Se basó en la hegemonía política indiscutible de unos partidos políticos débilmente institucionalizados, nada programáticos, sujetos a liderazgos caudillistas, clientelistas, patrimoniales, prebendarios y corruptos. Se creció económicamente, pero poco y mal. El empleo aumentó poco y de forma muy desigual, en correspondencia con el modelo de desarrollo de base estrecha que se impulsaba, y disminuyó drásticamente cuando lo hizo el crecimiento. Se fracasó en la lucha contra la pobreza y ni se intentó la lucha contra la desigualdad. Los avances en educación y salud no pudieron capitalizarse en desarrollo. No se supo, ni se quiso, reformar el Estado que quedó capturado por las camarillas empresariales, nacionales y transnacionales, y patrimonializado por los partidos políticos. Se avanzó en la descentralización y la participación popular, pero se dio a los partidos políticos el monopolio de la gestión política local con lo que se limitó el potencial del sistema. Se inició el reconocimiento formal del carácter multiétnico y pluricultural del país, pero no se desarrollaron políticas de reconocimiento e igualdad.

Desde 1998 dejó de funcionar el sistema. El crecimiento económico disminuyó notablemente y el desempleo se incrementó y con él la conflictividad social. La corrupción se hizo insoportable. En el curso de los conflictos fueron ganando fuerza y legitimidad los movimientos sociales, viejos y nuevos, crecientemente focalizados en la

defensa del control público de los recursos naturales y los servicios públicos esenciales. Son estas fuerzas las que llevarán al MAS a ser el segundo partido político en las elecciones de 2002 y las que acabarán expulsando a Sánchez de Lozada en octubre de 2003. Cuando los crecidos movimientos sociales sintieron que nuevamente el gas, como había pasado en su día con la plata y el estaño, serían extraídos y exportados no percibiendo a cambio sino modestas regalías e impuestos a administrar por un Estado incapaz de supervisar, corrupto y en manos de un sistema político clientelista, estalló la rebelión. La causa fundamental de los rebeldes era impedir que las próximas generaciones volvieran a encontrarse sin gas y sin desarrollo. Su protagonista principal fue la ciudad de El Alto. Sus ciudadanos pusieron los muertos pero impusieron también una nueva agenda: la agenda de octubre de 2003 con dos temas claves: el referéndum sobre el gas y la Constituyente.

El Presidente Carlos Mesa aceptó la agenda e intentó gobernar en circunstancias difíciles. Con gran respaldo de la opinión pública debido a su brillante personalidad, pero sin partido ni apoyos sociales organizados, con la oposición de todos los partidos tradicionales en el Congreso y con una sociedad fragmentada y crecientemente movilizadora, pudo gobernar mientras mantuvo un forzado entendimiento con Evo Morales que llegó hasta el referéndum del gas de julio de 2004. A partir de este momento todo comenzó a torcerse. El Presidente creyó que disponía de autoridad para imponer su propia política gasística (muy influida por su apreciación de la “comunidad internacional” y las responsabilidades ante ella) y el Congreso, incluido el MAS, se alió en su contra. Los cívicos cruceños, ante la eventualidad de una Asamblea Constituyente en la que serían minoritarios, relanzaron las demandas autonomistas, apoyadas en una gran movilización social y espoleadas por la conspiración contra Mesa. Aún así se llegó a las elecciones municipales de diciembre de 2004 que confirmaron la plena desafección popular respecto de los partidos tradicionales. El MAS se convirtió en el primer partido político pero no consiguió ganar en ninguna de las grandes ciudades. Su votación apenas superó el 20% —fue ligeramente inferior a la obtenida en las elecciones generales de 2002— y no consiguió ganar en ninguna de las grandes ciudades. El Presidente Mesa, cercado por un Congreso hostil, por los movimientos sociales radicalmente opuestos a su política gasística, por las mil reivindicaciones corporativas explotadas oportunistamente y por el rechazo abierto del autonomismo cruceño, aunque intentó diversas maniobras de recomposición de alianzas, todas le estallaron en las manos. Al final de su mandato hizo, sin embargo, una gran maniobra política de alcance histórico: forzó la renuncia a la sucesión presidencial de los Presidentes del Senado y del Congreso, pasando el testigo al Presidente de la Corte Suprema, un jurista de prestigio internacional y trayectoria intachable, Eduardo Rodríguez Beltré. Se impedía de este modo que los partidos políticos tradicionales desprestigiados accedieran a la Presidencia de la República, lo que hubiera generando sin duda un conflicto civil de alcances potencialmente devastadores.

Durante todo este convulso tiempo se fue gestando la teoría del empate catastrófico según la cual el país se encontraba en una extrema polarización territorial (occidente-

oriente) y social (derecha-izquierda), sin que ninguna de las partes pareciera poder imponerse sobre la otra resultando de este modo muy difíciles los proyectos constituyente y autonomista planteados desde cada frente. Los pactos para reducir las incertidumbres y viabilizar ambos procesos resultaban tan necesarios como imposibles. Muchos pescadores en río revuelto insistieron en la ingobernabilidad, según ellos inevitable, para impedir a toda costa el avance hacia la Constituyente. Comentaristas y sesudos analistas insistían en que las elecciones generales no podrían resolver nada.

Pero todos nos equivocamos. El Presidente Rodríguez ha pilotado con guante de seda y mano firme un difícil proceso, lleno de avatares e intentos desestabilizadores procedentes principalmente de los políticos tradicionales condenados al paro y atrincherados en el Congreso. Le han ayudado el ser hombre de Estado y el no tener ninguna ambición política. También la gran labor articuladora y desactivadora de su operador político, Jorge Lazarte, así como la prudencia de los movimientos sociales y del MAS que no se dejaron llevar por ninguna de las numerosas provocaciones orientadas sin duda a hacer fracasar las elecciones generales y a Prefectos finalmente celebradas. Su resultado demuestra que a lo largo del proceso que va de octubre de 2003 a diciembre de 2005 se ha ido rompiendo el empate catastrófico. El pueblo le ha dicho a Tuto Quiroga que siga trabajando por un proyecto político que exprese y discipline democráticamente a la derecha boliviana y que hoy tiene ya importantes parcelas de poder en las Prefecturas y en el Congreso. Le ha dicho a Samuel Doria Medina que merece respeto, pero que todavía tiene que demostrar que no ha hecho un partido para un hombre sino que él es el hombre que va a construir un partido de centro que le trascienda. Le ha dicho al MNR que es un activo histórico de Bolivia, que no debe desaparecer, pero que, si no supera su patrimonialización por el gonismo, puede quedar definitivamente liquidado. Les ha dicho a todos los que no salieron, o ni siquiera pudieron concurrir, que ya se acabó su tiempo político. Y sobre todo le ha dado a Evo la confianza y la hegemonía para que dirija el gran cambio económico y político que el país necesita.

La sabiduría política no consiste en saber donde quiero estar en cinco o diez años, sino en saber qué no puedo dejar de hacer aquí y ahora para avanzar hacia un futuro promisorio, aunque siempre incierto. Hasta que no sabes qué hacer aún no has entendido, decía Wittgenstein. El político y el ciudadano necios creen que todo tiene que hacerse en un corto espacio de tiempo cuando lo crucial es siempre saber qué no puede dejar de hacerse en cada momento para no perder el futuro. En este sentido tres son las tareas que propongo a reflexión.

La primera consiste en viabilizar la Constituyente y las Autonomías. Para ello hay que aclarar, en primer lugar, el régimen competencial de las Prefecturas. La vieja política puede estar tentada de refugiarse en algunas de ellas, erigiéndolas en bastiones de la oposición y manejando de modo poco transparente y responsable los nuevos recursos del gas. Es urgente proceder a regular tanto las competencias de los nuevos prefectos como las garantías de que su ejercicio se haga con transparencia y responsabilidad democrática. Hasta que lleguen las Autonomías es fundamental que los prefectos

elegidos y nombrados por el Presidente dispongan de un ámbito de responsabilidad claro, que no pueda interferir ni ser interferido arbitrariamente por el Ejecutivo nacional. En segundo lugar, hay que garantizar los referendos de autonomía en los Departamentos que así lo quieran, estableciendo nacionalmente los criterios a seguir para formar esta voluntad y ejercer en su momento el correspondiente derecho. Al establecer esta regulación de las preautonomías hay que reconocer y legalizar el proceso seguido por Santa Cruz. En tercer lugar, hay que procurar consensuar al máximo la futura Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente.

La segunda consiste en demostrar a la ciudadanía, los movimientos sociales y la comunidad internacional que se va a recuperar efectivamente el control nacional de los recursos naturales a lo largo de todo su ciclo desde la exploración hasta la comercialización. Para ello serán necesario dos cosas nada fáciles: (1) revisar los contratos actuales y dar garantías a los inversores internacionales de que obtendrán beneficios justos que compensen sus riesgos e inversiones, tratando de evitar la conflictividad internacional y enfrentándola eficazmente cuando resulte inevitable y (2) crear las capacidades nacionales para la dirección, regulación, participación y supervisión de todo el ciclo del gas, así como las necesarias para asegurar que los beneficios que se deriven de este recurso sirven para sustituir su extinción por capital humano, de infraestructuras y social. Este segundo punto es el más difícil pues requiere una combinación de compromiso productivo y de combate a los capturadores de rentas de todo tipo. Un día Bolivia se quedará sin gas y nada habrá tenido sentido si vuelve a pasar lo que se hizo con la plata y el estaño. El gas ha de servir para ayudar a transitar de la economía de base estrecha a la de base ancha, generando clases medias productivas y empleo formal y digno, ampliando la base tributaria del país y sobre ella construyendo un estado capaz de garantizar servicios públicos para todos, es decir, de universalizar la ciudadanía. Para este tránsito resultará fundamental la mano visible de un Estado reformado.

La tercera me parece ser la construcción decidida y progresiva de un sistema político y de un Estado capaz de impulsar políticas de desarrollo sostenible y con equidad.

Esta es una tarea que comienza ya desde hoy y se acelerará con la Constituyente, pero que seguirá mucho tiempo después de ella. Hay que despatrimonializar el Estado, irlo convirtiendo crecientemente en un Estado de derechos y de deberes para todos, universalizando para ello la seguridad jurídica. Hay que hacer una gestión pública no sólo técnicamente meritocrática sino también transparente y sometida al control social y legal. Hay que dar cauce al derecho a la autonomía departamental y saber articularla con la autonomía indígena y municipal. Hay que combatir no sólo la corrupción sino hurgar en las estructuras corruptoras cambiando reglas de juego e incentivos de comportamiento. Larga tarea para muchos años y para más de dos y hasta tres gobiernos, pero que toca hoy empezar con algunas medidas ejemplificadoras y que den sentido de dirección. No hay que seguir a la cooperación internacional en este campo (se ha equivocado casi siempre) sino saber liderarla para que su apoyo sirva a un plan de Estado genuinamente nacional.

Evo y Alvaro, los guaraníes, chiquitanos, aymarás, quechuas, cholos, blanquitos clases medias urbanas y hasta algún que otro empresario, la mayoría en definitiva de este

espléndido pueblo boliviano, injusta e inmerecidamente pobre pero esforzado, alegre, digno, rico en recursos, biodiversidad, historia, humanidad y futuro, el pueblo les ha comprometido a impulsar y dirigir democráticamente un proceso de dignificación y de soberanía que refunde la República sobre una Nación que por integrar por primera vez en la historia a todos/as merezca ese nombre. Ustedes ya saben que no se les ha votado para que impulsen ningún programa de extrema izquierda sino para que procedan a realizar profundas reformas democráticas, económicas y sociales que eleven los derechos individuales y colectivos de todos/as. La democracia es un viaje sin fin hacia la creación de las condiciones sociales y culturales que permiten la participación política igual y libre. Su fundamento moral es la convicción última de que ninguna vida vale más ni puede ser el instrumento de ninguna otra.

Yo le he pedido a Quispe, y le pido a Evo, perdón por 300 años de colonialismo. Estoy seguro de que a muchos españoles nos gustaría que el Príncipe de Asturias aprovechara la ocasión de su investidura como Presidente para hacer algún gesto en este sentido, pues ahora es el momento de iniciar el reencuentro abortado en 1992. Mirando al pasado sin ira podremos encontrar la cooperación justa para el futuro que hoy, más que nunca, es responsabilidad de todos con ustedes delante.

Barcelona, diciembre de 2005